

## **REPÚBLICA DE COLOMBIA**



### **RAMA JUDICIAL**

### **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**

**Medellín, doce (12) de mayo de dos mil veintitrés (2023)**

La Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, integrada por los Magistrados CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES (ponente), VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO y SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE, cumplido el traslado de que trata el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, procede a dictar la sentencia que corresponde en este proceso ordinario laboral instaurado por ANGELA MARÍA VALENCIA FLÓREZ contra TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLÍN S.A., TIEMPOS S.A.S., CONTRATE S.A., MISIÓN EMPRESARIAL S.A., EMPLEAMOS S.A. y ASEAR S.A., con intervención en su calidad de llamadas en garantía de LIBERTY SEGUROS S.A, SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A., CHUBB SEGUROS DE COLOMBIA S.A., SEGUROS DEL ESTADO S.A., COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. y BERKLEY INTERNATIONAL COLOMBIA SEGUROS S.A. (Radicado 05001-31-05-017-2021-00283-01).

### **ANTECEDENTES**

La demandante inició este juicio para que se declare la existencia de un contrato de trabajo con Terminales de Transporte de Medellín entre el 01 de septiembre de 2011 y el 18 de octubre de 2020, con intervención de simples intermediarias de Tiempos S.A., Contrate S.A., Misión Empresarial S.A., Empleamos S.A. y Asear S.A., para que en consecuencia se disponga con base a los factores salariales que corresponden al reajuste de las prestaciones sociales y las vacaciones, con reconocimiento de las primas de navidad, prima de vacaciones, la bonificación por recreación, la indemnización por despido sin

justa causa, la sanción moratoria del Decreto 797 de 1949 y la del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, además de la indexación y las costas del proceso.

Tales aspiraciones las fundamentó en que inició una relación laboral con Terminales de Medellín S.A. el 01 de septiembre de 2011 prestando sus servicios en las ZER - Zonas de Estacionamiento Regulado - en el cobro del costo del parqueo, actividad desplegada de manera personal y bajo subordinación de tal sociedad en condiciones idénticas por el término de siete años bajo la figura de trabajadora en misión, con acatamiento de órdenes, coordinación, horarios y directrices provenientes principalmente de ésta, aunque hubo supervisores de las diferentes empresas intermediarias con las que Terminales celebraba contratos de suministro de trabajadores en misión. Explica que la terminación de su vínculo tuvo lugar sin existir proceso disciplinario, siendo reemplazada por otra persona para iguales labores.

MISIÓN EMPRESARIAL S.A. arribó contestación afirmando que con la demandante hubo varios contratos por obra o labor en distintos períodos y con un objeto contractual independiente con interrupciones entre uno y otro, siendo finalizado cada uno de ellos por causa legal, en tanto su duración pendía de la duración de la licitación con Terminales de Transporte de Medellín, siendo el último nexo terminado el 29 de febrero de 2016 sobre el que ha operado el fenómeno de la prescripción. Como excepciones de fondo propuso las de prescripción, buena fe, inexistencia de la obligación, pago y compensación (Archivo 09).

TIEMPOS S.A. se pronunció en término señalando desconocer sí existió alguna relación de tipo laboral con Terminales de Transporte de Medellín, con aceptación del vínculo entre el 20 de septiembre de 2011 y el 23 de marzo de 2012 para ejecutar el oficio de impulsadora de tiquetes para terminales en virtud del contrato comercial suscrito entre las sociedades para suministro de personal por incremento en la producción. Formuló las excepciones de prescripción, pago, inexistencia de las obligaciones demandadas, cobro de lo no debido, compensación y buena fe (Archivo 10).

La COMPAÑÍA NACIONAL DE TRABAJADORES TEMPORALES S.A. - CONTRATE S.A.- advirtió que la demandante tuvo una vinculación laboral entre el 24 de marzo de 2012 y el 23 de marzo de 2013 en razón de un contrato por prestación de servicios celebrado con Terminales de Transporte de Medellín luego de un proceso licitatorio, siendo enviada en misión por incremento en los servicios de parquímetro como impulsadora de tiquetes, labor por la que devengaba un salario para 2012 de \$566.700. Presentó como medios exceptivos la prescripción, inexistencia de la obligación, petición de lo no debido, falta de causa, falta de objeto, pago y buena fe (archivo 11).

TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLÍN S.A. por su parte, negó un nexo laboral que se haya presentado con la demandante, aduciendo que el manejo de las zonas de parqueo regulado es de carácter temporal y específico como fruto de un convenio interadministrativo realizado con la Secretaría de Movilidad del Municipio de Medellín, administración de las ZER que no pueden integrarse como una actividad misional de Terminales, por pender de los mencionados convenios sin duración a largo plazo, con lo que tampoco puede hablarse de una tercerización laboral porque la demandante no desarrolló actividades misionales permanentes a través de un proveedor contratado para provisionar los requerimientos exigidos por el Municipio y cumplir las funciones del pacto interadministrativo. Excepcionó la inexistencia de vínculo contractual entre la demandante y Terminales de Transporte de Medellín S.A., inexistencia de relación laboral entre Terminales de Transporte de Medellín y la demandante, inexistencia de la obligación y cobro de lo no debido, buena fe por parte de la demandada, temeridad y prescripción (Archivo 12).

En igual oportunidad, esta demandada presentó llamamiento en garantía frente a las empresas de servicios temporales ya vinculadas a la acción acudiendo a los contratos por prestación de servicios rubricados, y de paso, llamó a LIBERTY SEGUROS S.A., SEGUROS GENERALES SURA S.A., CHUBB SEGUROS DE COLOMBIA S.A., SEGUROS DEL ESTADO S.A., COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A y BERKLEY INTERNATIONAL COLOMBIA SEGUROS S.A., en virtud a las pólizas de cumplimiento contratadas por cuenta de Misión Empresarial S.A., Empleamos S.A.S. y Asear

S.A., cuyo beneficiario y asegurado es Terminales de Transporte de Medellín S.A.

Finalmente, EMPLEAMOS S.A. se manifestó en similares términos aduciendo que con esta empresa la demandante tuvo varias contrataciones por obra o labor como trabajadora en misión bajo los contratos comerciales suscritos con Terminales de Transporte de Medellín S.A., así: del 01 de marzo de 2016 al 15 de febrero de 2017, del 01 de marzo de 2017 al 25 de marzo de 2017, del 26 de marzo de 2019 al 25 de marzo de 2018 y del 26 de marzo de 2018 al 16 de septiembre de 2018, períodos en los que Empleamos dirigía toda la operación a través de funcionarios propios o trabajadores en misión como supervisores y coordinadores. Propuso como excepciones en sustento a su defensa las de inexistencia de las obligaciones a cargo de Empleamos S.A., legalidad de la contratación laboral, terminación del contrato de trabajo suscrito con el demandante, inexistencia de la obligación de indemnizar, pago, buena fe, prescripción, compensación.

Por auto que la autoridad judicial de conocimiento emitió el 13 de agosto de 2021 dio por no contestada la demanda por cuenta de Asear S.A. (archivo 21) y dio admisión a los llamamientos en garantía formulados hacia las sociedades ya integradas al trámite. Luego, por decisión del 17 de septiembre de 2021 admitió estos llamados frente a las aseguradoras enunciadas (archivo 32).

Se obtuvo pronunciamiento de Contrate S.A. (archivo 29), Misión Empresarial S.A (Archivo 30), Empleamos S.A (archivo 31) con oposición a lo revelado para sustentar ese llamamiento, por aducir que no se alega un incumplimiento de las obligaciones de las empresas, pues las responsabilidades laborales pactadas siempre fueron satisfechas, no siendo posible atribuirse las consecuencias de la relación que pudiera llegarse a declarar frente a Terminales de Transporte de Medellín S.A.

Asimismo, arribaron respuesta Liberty Seguros S.A (archivo 36), Seguros Generales Suramericana S.A (archivo 39), Chubb Seguros Colombia S.A. (archivo 40), Seguros del Estado S.A. (archivo 42), Berkley International Seguros Colombia S.A. (archivo 43) y Compañía Mundial de Seguros S.A.

(Archivo 44), las que en términos generales anunciaron su oposición por inexistencia de relación laboral con Terminales de Transporte de Medellín S.A., por fungir como únicas empleadoras las EST, y en ese orden, no concurrir los elementos necesarios para estructurar responsabilidad en cabeza del asegurado ya que los incumplimientos se enrostran no en los tomadores sino en Terminales de Transporte de Medellín S.A., con la precisión que dados los amparos definidos, no cualquier condena contra esta sociedad es objeto de cobertura por todos los contratos celebrados con atención al fenómeno prescriptivo, respuestas que fueron avaladas por el Despacho por auto del 19 de noviembre de 2021 (Archivo 45), con rechazo al llamamiento efectuado por Berkley International Seguros Colombia S.A. a Asear S.A.

En ese marco procesal, el Juzgado Diecisiete Laboral del Circuito de Medellín profirió sentencia el 23 de mayo de 2022, y DECLARÓ que entre la demandante y Terminales de Medellín S.A. existieron dos contratos de trabajo del 20 de septiembre de 2011 al 30 de junio de 2013 y del 21 de enero de 2016 al 18 de octubre de 2020, período en el que se ocultó su calidad de empleador. CONDENÓ a Terminales de Medellín S.A. a pagar \$624.347 por concepto de reajuste de auxilio de cesantías, \$72.190 por reajuste de intereses sobre las cesantías, \$2.039.802 por prima de vacaciones, \$271.973 por bonificación por recreación, \$3.056.632 por prima de navidad, \$2.721.189 por indemnización por terminación del contrato de trabajo. CONDENÓ a Terminales de Transporte de Medellín S.A al pago de un día de salario por cada día de retardo a partir del día 90 después de la terminación del vínculo, esto es, a partir del 09 de enero de 2021 y hasta el pago de la obligación calculada sobre el valor de \$29.260 diarios. DECLARÓ probada la excepción de prescripción de forma parcial, y ABSOLVIÓ a las restantes convocadas de las pretensiones formuladas en su contra. CONDENÓ en costas a Terminales de Transporte de Medellín S.A, fijando las agencias en derecho en la suma de \$2.000.000.

La demandante a través de su mandatario judicial aspira a que se modifique la decisión, en el sentido de no dar aplicación al fenómeno de la prescripción ya que a su juicio no operó, en tanto esta se contabiliza transcurridos 90 días luego de terminado el contrato de trabajo. Adicionalmente, señala que debe reconocerse la sanción del artículo 99 de la Ley 50 de 1990 toda vez que la

consignación de las cesantías se dio por un salario que no correspondía al devengado (Min 1:16:07 Archivo 65 Parte3).

Terminales de Transporte de Medellín también presentó disenso aclarando que conforme al Decreto 1079 de 2015 la actividad misional de la sociedad no tiene que estar relacionada dentro del objeto social. Expuso que en virtud de los contratos interadministrativos celebrados y a fin de darles satisfacción no tienen que sostenerse relaciones de trabajo, sino que es posible subcontratar o tercerizar servicios, solicitando la intervención de empresas de servicios temporales, la que depende de la delegación de parte de la Secretaría de Movilidad a Terminales de los parquímetros. Enfatizó en la ausencia de subordinación que pudo existir de esta sociedad hacia el actor donde todos sus elementos provinieron de las EST según confesión de la demandante, resaltando la buena fe de la que estuvo provista su conducta y que el solo hecho de exceder el año permitido por ley para hacer uso de trabajadores en misión, no revela una relación subordinada, además porque la actividad misional de Terminales no tiene que ver con el control de parquímetros. Adujo que en el asunto existe responsabilidad solidaria de parte de las EST porque al ser las contratantes, debieron percatarse que la persona no haya prestado el servicio antes, por lo que si se delegó esa verificación de requisitos, deben proceder con la respectiva indemnización por no vigilar ese cumplimiento. Indicó que las pólizas contratadas deben hacerse efectivas porque de lo contrario, perdería sentido su objetivo si no ampara ninguna de las figuras contempladas en los artículos 34 y 35 del CST. Finalmente, requirió la revisión de la liquidación de la sanción del Decreto 797 por aducir que su contabilización debe darse a partir de días hábiles, por lo que el término vencería más allá de enero de 2021. Pidió que los puntos no mencionados en el recurso sean estudiados a partir del grado de Consulta (Min 1:23:37 Archivo 65 Parte3).

La Sala conoce del asunto en el marco de las alzas, con la precisión dada la manifestación de la apelante demandada, que la Consulta en el presente no procede, de conformidad con lo que al respecto estipula el artículo 69 del CPTSS el que en su contenido pertinente reza: “... *También serán consultadas las sentencias de primera instancia cuando fueren adversas a la Nación, al*

*departamento o al municipio o a aquellas entidades descentralizadas en las que la Nación sea garante...”*, lo que muestra que la demandada condenada no tiene la naturaleza que la disposición normativa impone (Págs. 52-63 Archivo 01).

En el término pertinente, las partes presentaron sus alegaciones de segunda instancia, con argumentos semejantes a los expuestos en las etapas procesales transcurridas en primer grado.

### CONSIDERACIONES

Atendiendo las materias de los recursos de alzada, los problemas jurídicos a resolver por la Sala se circunscriben a las siguientes cuestiones: 1) Decidir si se desnaturalizó o no la contratación a través de empresas de servicios temporales y por consiguiente, si con Terminales de Transporte de Medellín S.A. para el caso de la demandante existió una vinculación de carácter laboral a través de sendos contratos, siendo Tiempos S.A.S., Contrate S.A, Misión Empresarial S.A., Empleamos S.A. y Asear S.A., simples intermediarios; 2) Concretar si hay lugar a la sanción del artículo 99 de la Ley 50 de 1990 por valores insolutos por cesantías consignadas; 3) Verificar si hay rubros no prescritos dejados de reconocer; 4) Revisar la sanción moratoria impuesta respecto a su fecha de inicio; y 5) Determinar la viabilidad de extender las condenas a las EST, por la figura de la solidaridad.

#### Contrato realidad

Para definir este aspecto, se tiene que las formalidades establecidas por los sujetos de la relación jurídica en este caso, apuntan a la contratación de la demandante como trabajadora en misión por cuenta de Tiempos S.A., Contrate S.A., Misión Empresarial S.A., Empleamos S.A.S. y Asear S.A. a partir del 20 de septiembre de 2011 y hasta octubre de 2020 por medio de contratos por obra o labor suscritos a fin de desempeñarse como impulsadora de tiquetes en los parquímetros de la ciudad de Medellín (Págs. 14-15 archivo 9, Págs. 23-24 y 26 archivo 10, Págs. 35 y 38 archivo 11, Págs. 20-27 y 66-67,

71, 73 y 77 archivo 16), vinculación originada de unos contratos por prestación de servicios celebrados con Terminales de Transporte de Medellín S.A. para *“prestación de servicios temporales de colaboración”* (Págs. 14-35 archivo 12 y Págs. 100-190 archivo 17), la que a su vez intervino en unos convenios interadministrativos con la Secretaría de Movilidad del Municipio de Medellín (Págs. 2-100 Archivo 17).

Sobre la forma de contratación, al encontrarse fuera de toda discusión los servicios prestados por la accionante como trabajadora en misión, es dable indicar que según los artículos 71 y siguientes de la Ley 50 de 1990, es empresa de servicios temporales aquella que contrata la prestación de servicios con terceros beneficiarios para colaborar temporalmente en el desarrollo de sus actividades, mediante la labor de personas naturales, - *trabajadores en misión*- (Artículo 74), que son contratados directamente por la temporal, asignándose a ésta la calidad de empleadora. Entidad que para fungir como tal, requiere una autorización otorgada por el Ministerio del Trabajo, pues de no contar con ella y aun así prestar servicios de esta naturaleza, se incurrirá en sanciones administrativas (artículos 82, 83 y 93).

En ese mismo sentido, el Decreto 4369 de 2006, en su artículo 10 estipuló: *“No podrán ejercer la actividad propia de las Empresas de Servicios Temporales, aquellas que tengan objeto social diverso al previsto en el artículo 71 de la Ley 50 de 1990; las que no estén debidamente autorizadas por el Ministerio de la Protección Social para el desempeño de esa labor (...)”*. Y específicamente en el artículo 77 de la Ley 50, se estableció que los usuarios de las empresas de servicios temporales sólo podrán contratar con éstas en los siguientes casos: *“...1. Cuando se trate de las labores ocasionales, accidentales o transitorias a que se refiere el artículo 6º del Código Sustantivo del Trabajo. 2. Cuando se requiere reemplazar personal en vacaciones, en uso de licencia, en incapacidad por enfermedad o maternidad. Y 3. Para atender incrementos en la producción, el transporte, las ventas de productos o mercancías, los períodos estacionales de cosechas y en la prestación de servicios, por un término de seis (6) meses prorrogables hasta por seis (6) meses más...”*. Si cumplido dicho plazo, el objeto del contrato subsiste en la



empresa usuaria, ésta no podrá prorrogarlo ni celebrar uno nuevo con la misma o con diferente EST (parágrafo del artículo 6 del Decreto 4369).

Como quiera que es observado el abuso de esta forma de vinculación laboral, la legislación nacional ha tratado de implementar restricciones para evitarlo y en esa dirección, se ha pronunciado la jurisprudencia nacional, consolidando doctrina probable, al reiterar pacíficamente, por virtud del principio de la *“primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales”* previsto en el artículo 53 Superior, que cuando una persona jurídica actúa como empresa de servicios temporales sin autorización para ello, o por fuera de los límites legales, esta entidad debe considerarse como una simple intermediaria en los términos del artículo 35 numeral 2 del CST, siendo el verdadero empleador quien se benefició del servicio de los supuestos trabajadores en misión, y que al infringirse las reglas del trabajo temporal, debe concluirse que existe un contrato de trabajo a término indefinido entre el empleado y la denominada usuaria, predicándose la responsabilidad solidaria entre el verdadero empleador y el simple intermediario. Al respecto, resultan ilustrativas algunas sentencias de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, como la SL del 24 de abril de 1997 Radicado 9435, reiterada en la SL17025 de 2016, SL3520 de 2018, SL2710 de 2019, SL2797 de 2020, SL4330 de 2020 reiterada en la SL446 de 2023.

Con base en los anteriores lineamientos normativos y jurisprudenciales, se tiene que la contratación a través de empresas de servicios temporales de la actora, para ser trabajadora en misión de Terminales de Transporte de Medellín S.A, claramente no fue utilizada para cumplir las actividades excepcionales, temporales y transitorias que permite la ley, mostrando las probanzas con las que se cuenta, que en contraposición a ello, fue un tipo de contratación con la que se tercerizó la labor, constituyéndose la actividad desarrollada por la trabajadora en una necesidad permanente en la empresa cliente, pues aunque se aduce que tenía el carácter de temporal por pender de la delegación del Municipio en el manejo de los parquímetros y la vigencia de los contratos interadministrativos, su creación, funcionamiento y delegación en Terminales se tornó en indefinido, y aún con ello, se acudió a

una contratación de personal excediendo el límite máximo de seis (06) meses prorrogables otros seis (6), sin que se modifique el panorama por el hecho de haber acudido a diferentes empresas con objeto social de servicios temporales, pues de cualquier forma, la finalidad era la misma, pudiendo observarse luego de concurrir iguales circunstancias por un tiempo prolongado, el desvanecimiento del fin de esta posibilidad contractual.

Y es que se dejó probado que no se presentaron alteraciones en lo esencial de las condiciones de la prestación del servicio, pues contrario a ello, lo que puede extraerse de los diferentes convenios contractuales y los dichos de las deponentes Bibiana Patricia Pasos Tabares y Janeth Shirley Alzate López, quienes bajo igual modalidad de contratación ejecutaron idéntico oficio al de la promotora del juicio, es que el escenario de trabajo se mantuvo idéntico, sufriendo variación únicamente en lo que a la formalidad de la contratación respecta, la temporal a cargo, y en algunos eventos, la dotación recibida, conservándose las funciones a desempeñar, los horarios y logística de trabajo, el salario devengado, y en general los parámetros establecidos para el cumplimiento de la labor, situación que se conservó por lo menos ocho años y del mismo modo, para el caso de las declarantes por un tiempo que superó el decenio, no siendo admisible pregonar que se diera lugar al propósito de la figura del trabajador en misión, pues lo que es evidentemente observado es el ánimo de encubrir una necesidad indefinida en el desarrollo de sus actividades bajo la apariencia de una necesidad excepcional, circunstancias que evidencian una transgresión a la regulación del servicio temporal y un fraude a la ley en estos casos de intermediación ilegal, suficientes para considerarse a la usuaria la verdadera empleadora y directa responsable de las acreencias que se causen en el desarrollo de la contratación.

De este modo, acudiendo a la aplicación del principio superior de la primacía de la realidad sobre las formas - artículo 53 C.P-, se afirma que lo presentado en el caso de la promotora del juicio y Terminales de Transporte de Medellín S.A en el plano de la realidad, es un vínculo de carácter laboral, porque aunque pudiera asistir razón a la recurrente en cuanto a la ausencia en la demostración de la subordinación respecto de Terminales de Transporte de Medellín S.A, en tanto de la prueba testimonial puede extraerse que las

órdenes, permisos, horarios impuestos, entrega de dotación y elementos de trabajo, supervisión y pagos de los rubros laborales provenían de empleados vinculados también a las empresas de servicios temporales, de conformidad a todo el contexto la ejecución de la actividad puede concluirse lo siguiente: 1) era en Terminales de Transporte de Medellín que recaía la decisión del tipo de trabajo a realizar por la contratada; 2) la frecuencia de la labor contrario a ser ocasional o temporal para atender los eventos previstos en el artículo 77 de la Ley 50 de 1990 y artículo 6° del Decreto 4369 de 2006, tuvo una duración de por lo menos ocho años desnaturalizando el objetivo de los trabajadores en misión; 3) la ajénidad respecto del servicio prestado cuya titularidad de los elementos de trabajo era exclusiva de Terminales, quien por demás fijaba todos y cada uno de los parámetros en cuanto a tarifas, atención al usuario y protocolos en el manejo de las ZER, partiendo toda la logística desde esa sociedad, y en últimas, era quien adoptaba cada decisión trascendental, definía el personal que se vinculaba o se extraía de la nómina de la temporal según fue informado por las testigos, y era quien impulsaba el control de toda la operación; 4) su objeto social dirigido entre otras cosas a *“proporcionar soluciones de movilidad, que contribuyan al desarrollo del transporte en los espacios públicos y servicios relacionados al mismo mediante la administración y explotación de zonas de estacionamiento regulado, en espacios públicos, parqueaderos y estacionamientos comercio destinados al parqueo, custodia, conservación, salvaguarda, cuidado y vigilancia de vehículos automotores de toda clase, así como vehículos inmovilizados por infracciones de tránsito o por cualquier otro motivo...”*, revela una conexión directa de la labor realizada con el fin esencial de la sociedad, sin que de manera alguna la tarea desplegada por la demandante se constituyera en accesorio u ocasional; 5) la central establecida para la operación en general, recogida de elementos de trabajo, liquidación de dineros, resolución de dificultades, firma de contratos, entrega de liquidaciones de prestaciones sociales, era en las instalaciones de Terminales de Transporte de Medellín S.A donde la temporal del momento estaba obligada a instalar una oficina, evidenciándose incluso un sometimiento de las temporales a las condiciones empresariales de Terminales de Transporte, sin que aquellas estuvieran dotadas de autonomía administrativa o financiera para efectos de sobrellevar la ejecución del contrato por prestación de servicios. 6) la asunción de los

riesgos de la actividad estaba en cabeza de Terminales de Transporte de Medellín S.A, siendo identificada la trabajadora ante el público como empleada de Terminales de Transporte, cuyo logo registraba en su uniforme y el tiquete de cobro.

En ese orden, si bien aduce la mandataria judicial apelante que no se probó la sujeción contractual necesaria para advertir que con la condenada en efecto existió un nexo de tipo laboral, debe decirse que respecto de las temporales tampoco ello luce evidente, pues pese a que las formalidades escritas las muestran como las contratantes y pagadoras de las acreencias laborales causadas, más allá de ese hecho, ninguna intervención se refleja respecto de las actividades desempeñadas por la demandante, y confrontado ello con la realidad, especialmente en lo que hace al carácter de la necesidad contratada y su duración, permite descifrar que las actividades desarrolladas por la trabajadora fueron permanentes y no transitorias, sin estar dentro de un marco de producción estacional, en cuyo caso la empresa usuaria debió vincular de manera directa a su propio personal, lo que no se derruye por pertenecer los jefes directos mencionados- supervisores y coordinadores- a la temporal y de allí aducir que el elemento de subordinación proviene es de las que fungieron como parte patronal, pues lo que denotan las probanzas, es que todo el entorno de la contratación viene disfrazado con el uso de una figura que a todas luces resulta alejada de la legalidad, siendo instrumentalizado el servicio a cargo de las empresas de servicios temporales para ocultar relaciones laborales continuas y por esa vía reducir costos laborales.

En ese contexto, fácil es concluir que haber vinculado a la demandante indirectamente en los períodos definidos por la *a quo* - 20 de septiembre de 2011 al 30 de junio de 2013 y 21 de enero de 2016 al 18 de octubre de 2020- sin oposición al respecto, no supuso cosa distinta que una estrategia que constituyó una intermediación laboral, encontrando acertada la determinación de asignar en Terminales de Transporte de Medellín S.A. su calidad de empleadora frente a la señora Ángela María Valencia Flórez.

De la prescripción

La actora reclamó su derecho ante Terminales de Transporte de Medellín S.A. el 26 de noviembre de 2020 (Págs. 64-74 Archivo 01), por lo que siendo declarados los contratos de trabajo a partir de 2011 desde donde habría lugar al reconocimiento de las prestaciones extralegales a que hubiera tenido derecho como empleado vinculado directamente, se excedió el término trienal, por lo tanto, opera la prescripción según las voces de los artículos 151 CPTSS y 488 CST de todas aquellas acreencias laborales causadas previo al 26 de noviembre de 2017 como bien lo dispuso la falladora, con la precisión de que los 90 días a los que hace alusión el apoderado de la activa tiene efectos restrictivos para la sanción del Decreto 797 de 1949, donde son contabilizados para efectos de proceder con la liquidación de los salarios, prestaciones e indemnizaciones una vez terminado el contrato, pero esa disposición no revive, ni mantiene vigentes los términos para efectos de hacer valer judicialmente los derechos laborales de parte del trabajador, donde cobra relevancia es el momento de la causación de cada prestación en el marco de lo regulado en los artículos 151 y 488 ya mencionados.

De la sanción del artículo 99 de la Ley 50 de 1990

La sanción por no consignación de la cesantía, no opera de manera automática, encontrando esta Sala de decisión que en el asunto, aun bajo una intermediación ilegal, el actor recibió el pago de las cesantías de manera oportuna, resultando ser la ausencia en el pago de las cesantías la castigada con la mora, por lo que no siendo evidente esa dejadez ante los derechos del trabajador frente a este concepto, es que no se hallan méritos para imponer esta sanción onerosa.

De la liquidación de la sanción del Decreto 797 de 1949

Se cuestiona en el recurso de la pasiva el mecanismo a partir del cual fueron contabilizados los 90 días para imponer esta sanción moratoria por considerar que para ese efecto deben tenerse en cuenta los días hábiles, debiendo indicarse que la respectiva norma - artículo 1° - contempla términos

perentorios para constituir en mora cuando no realiza en forma oportuna a órdenes del trabajador oficial los salarios, las prestaciones e indemnizaciones que le adeuden, y en lo pertinente, el artículo 62 de la Ley 4ta de 1913 señala que *“En los plazos de días que se señalen en las leyes y actos oficiales, se entienden suprimidos los feriados y de vacantes, a menos de expresarse lo contrario. Los de meses y años se computan según el calendario; pero si el último día fuere feriado o de vacante, se extenderá el plazo hasta el primer día hábil.”*, lo que implicaría que ese plazo de gracia de los 90 días, fueran hábiles por no haber mención legal expresa que refiera que son calendario.

Sin embargo, sobre este punto, ya se ha pronunciado la H. Corte Suprema de Justicia, y en sentencias como la SL981 de 2019 se hizo una interpretación de tal mandato, encontrando que ese entendimiento no era correcto, puesto que en el Derecho del Trabajo existe la particularidad de que el contrato de trabajo se ejecuta día a día, desde la fecha de su suscripción hasta aquella de su finalización, incluyendo días de descanso dominical y festivo, que suman para efectos laborales, por lo que algunos plazos en días referidos al contrato de trabajo en los cuales la ley no califica si son hábiles o calendario, deben entenderse corridos como ocurre con el preaviso de 30 días de terminación del contrato a término fijo o el aviso de 15 días de despido por las justas causas de los numerales 9.º a 15 del literal a), artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo, entendiendo también que el cálculo de los tiempos de servicio necesarios para acceder a las prestaciones económicas del contrato de trabajo debe incluir el día de inicio del contrato de trabajo y realizarse teniendo en cuenta el calendario, toda vez que en estricto sentido los días laborados no son «términos»; con la precisión que las reglas civiles de cómputo de plazos no son compatibles con la lógica del contrato de trabajo; además de recurrir a la lógica de la época de su legislación, imponiendo en los jueces el deber de interpretar las normas jurídicas de acuerdo con las realidades para las cuales se regula. Y desde esta perspectiva, la anterior interpretación para la Corte es más acorde con el grado de evolución tecnológica que, actualmente, en pleno siglo XXI le permite a la administración pública liquidar los contratos de trabajo mediante aplicativos y software seguros, rápidos y simples.

En esa línea, teniendo en cuenta que el contrato de trabajo terminó el 18 de octubre de 2020, el plazo de gracia de 90 días comienza a contarse a partir del día siguiente, día a día, término que se cumplió el 19 de enero de 2021, resultando ello acorde con la determinación de primera instancia.

*De la extensión de las condenas a las EST*

Al respecto, se ha pronunciado la H. Corte Suprema de Justicia en la Sala de Casación Laboral, aduciendo que en los eventos de contratación fraudulenta por uso indebido de vinculación temporal a través de trabajadores en misión la empresa de servicios temporales mantiene una responsabilidad compartida con la empresa usuaria declarada verdadero empleador por no haber ejercido su posición contractual de manera legal, así como por no haber promovido cuidado el cumplimiento de los términos y condiciones legales para estas formas excepcionales de contratación (ver SI2710-2019, SL3453-2021,

En tal sentido, basta acudir al contenido del artículo 35 del CST para pregonar que quienes fungieron como intermediarios no anunciados, son responsables solidariamente de todos los rubros de tipo laboral que debieron ser reconocidos a la demandante al “*haber participado en el encubrimiento de la verdadera relación laboral del accionante, dándole la calidad de una simple intermediaria*” (CSJ SL2834-2021), siendo esta la consecuencia impuesta por el legislador al encontrar acreditada esta figura, no encontrando mérito para excluir conceptos extralegales que estuvieran a cargo del verdadero empleador, en tanto no se trata de un escenario donde se visualiza un simple cambio de patronos, sino que se está ante una contratación fraudulenta permitida por las EST, que es el mérito que impone que comparta con la empresa cliente la responsabilidad de las acreencias a las que tuviera derecho, con independencia a que sean aplicadas en una condición que difiere al de un trabajador privado.

Es en virtud de lo anterior, que en este punto la providencia debe ser revocada de manera parcial, para en su lugar atribuir la solidaridad deprecada, pero con la precisión que surge respecto de las temporales que coinciden en su

contratación con el tiempo de las obligaciones condenadas, pues esta garantía acudiendo al factor de proporcionalidad va de la mano con la prestación del servicio, ya que se fundamenta en la permisión ilegal por el período que estuvo bajo su disfrazada vinculación pues no resulta razonable que deba asumir de manera solidaria prestaciones causadas en todo el tiempo declarado en la que no intervino ni participó bajo ninguna calidad, lo que impone un límite a esa responsabilidad, y como en este caso en el lapso no prescrito y a partir del cual se impartió condena - 26 de noviembre de 2017 al 18 de octubre de 2020- la intermediación surgió de parte de Empleamos S.A y Asear S.A, es a cargo de estas que debe declararse esta garantía (Ver Rdo. 38.255 de 2012 extensiva a la solidaridad del artículo 35 del CST.

#### *Cobertura y vigencia póliza de seguro*

Está acreditado en el plenario diferentes contrataciones de unas pólizas de cumplimiento cuyos tomadores o afianzados fueron las EST y el asegurado es Terminales de Transporte de Medellín S.A, en ese orden, no es posible que la condenada pretenda hacer efectivos esos amparos en virtud de unas acreencias laborales no satisfechas de su parte con derivación de la declaratoria de un contrato realidad, ya que la protección asegurada recae es ante los incumplimientos de las sociedades contratantes y tomadoras de los seguros de cara a los contratos por prestación de servicios rubricados, por lo que estando ante un panorama que difiere al contratado al momento de adquirir las pólizas donde lo que se pretendía cubrir es el patrimonio de Terminales de Medellín ante una eventual omisión en el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de las EST, mal haría la judicatura en imponer a las sociedades aseguradoras la obligación pretendida de cuenta de una inobservancia que no emana del tomador, otorgando el beneficio asegurado bajo una modificación de todas las condiciones del contrato de seguro que se dejaron estipuladas y dieron lugar a su contratación, razones que implican que se confirme también en este punto la providencia.



En resumen, la providencia revisada en apelación habrá de revocarse en cuanto absolvió de la responsabilidad solidaria para en su lugar declararla y se confirmará en lo demás.


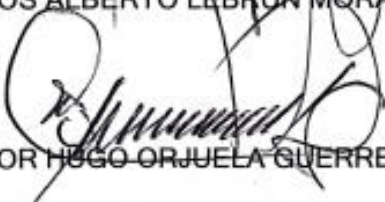

Por la manera como se resolvió la alzada, en esta instancia no se causaron costas.

### DECISIÓN:

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Quinta de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, **REVOCA PARCIALMENTE** la sentencia apelada y consultada de fecha y procedencia conocidas, en cuanto se absolvió de la responsabilidad solidaria a cargo de EMPLEAMOS S.A y ASEAR S.A para en su lugar declararla respecto de las acreencias impuestas a Terminales de Transporte de Medellín S.A. **CONFIRMA** en lo demás. Sin costas.

Notifíquese por EDICTO.

Los Magistrados,

  
CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES  
  
VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO  
  
SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO  
SALA LABORAL



SECRETARÍA  
EDICTO

El Secretario de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín:

**HACE SABER:**

Que se ha proferido sentencia en el proceso que a continuación se relaciona:

**Radicación:** 05001310501720210028301  
**Proceso:** ORDINARIO LABORAL  
**Demandante:** ANGELA MARIA VALENCIA FLOREZ  
**Demandado:** TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLIN S.A  
**M. P.** CARLOS ALBERTO LEBRUN MORALES  
**Fecha de fallo:** 12/05/2023  
**Decisión:** CONFIRMA Y REVOCA PARCIALMENTE

El presente edicto se fija por el término de un (01) día hábil, con fundamento en lo previsto en el artículo 41 del CPTSS, en concordancia con el artículo 40 *ibídem*. La notificación se entenderá surtida al vencimiento del término de fijación del edicto.

Se fija hoy 15/05/2023 desde las 08:00 am. y se desfija a las 05:00 pm.

**RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS**  
Secretario